

El relator pasó por aquí

Terminó la visita de diez días del relator especial de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales, Philip Alston, con un comunicado diplomático en todo el sentido de la palabra. Por un lado, reconoció los logros de seguridad del Gobierno mientras que, por el otro, señaló alarmas sobre las amenazas de muerte que han sufrido los familiares de las víctimas.

La presencia de Alston en el país se dio por una invitación del Gobierno, dentro de los compromisos de Colombia con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Las funciones del alto diplomático incluyen investigar las ejecuciones arbitrarias de todos los actores del conflicto y evaluar las medidas oficiales que se están tomando para ponerles fin y castigar a los responsables. Ante este mandato de informar al organismo internacional sobre los “falsos positivos”, fueron altas las expectativas que se generaron sobre las conclusiones del relator.

Para algunos, Naciones Unidas podría adoptar la tesis de que la política de asesinatos de jóvenes por parte de militares para hacerlos pasar por guerrilleros, y así cobrar éxitos operacionales, estaba dictada desde el más alto nivel del Ejecutivo. Afortunadamente, esto no sucedió. Las declaraciones de Alston del pasado jueves son enfáticas en aclarar que no se encontraron pruebas que indiquen “que estas ejecuciones se llevaron a cabo como política oficial del Gobierno”.

Sin embargo, el emisario internacional tampoco defiende la tesis oficial de las “manzanas podridas”. Es decir, que los atroces crímenes habrían sido obra de militares corruptos que actuaron solos y aislados. Para Alston, esta idea es “igualmente insostenible”. Por el número de casos, su distribución geográfica y las unidades militares involucradas, califica los “falsos positivos” como operaciones “más o menos sistemáticas”.

EDITORIAL

El relator de la ONU pone sobre la balanza los logros y desafíos del Gobierno sobre las ejecuciones extrajudiciales. Hay que atender sus advertencias.

El relator reconoce que “el Gobierno ha tomado medidas importantes para responder a estos homicidios”. Se refiere al paquete de 15 iniciativas que el entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos empezó a implementar después de la purga de generales del año pasado. El destape de la existencia de esta maquinaria de reclutamiento macabro de jóvenes pobres para reportar éxitos militares ha sido uno de los más severos golpes a la credibilidad y legitimidad tanto de la política de seguridad democrática como de la de derechos humanos de las Fuerzas Armadas.

Pero no se puede desconocer que fue el propio Gobierno el que dio el primer paso para detectar estas actividades dentro de las filas y tratar de corregir el rumbo. Más allá de la queja sobre su uso eufemístico, la expresión “falso positivo” ha empezado a ser usada por la oposición como arma de ataque político contra el Gobierno en áreas muy diferentes a las de los derechos humanos.

Con algunas diferencias en el tono y en los énfasis, el reporte preliminar de Alston da una revisión acertada de los logros y los desafíos en cuanto a las ejecuciones arbitrarias de algunos militares. La política desplegada por el Gobierno no está en la dirección correcta, pero le falta mejorar en la implementación. Y en este sentido, los reportes sobre los hostigamientos a los familiares por miembros de la Fuerza Pública no pueden caer en saco roto.

Aunque al Ministerio de Defensa le cabe razón al alertar que hay informaciones de inteligencia sobre falsas denuncias para desprestigiar a los militares, sería un grave error bajar la guardia sobre estos asesinatos selectivos, ahora que los informes han venido disminuyendo. Seguir el camino de la extrema politización no sólo complicará la depuración interna de las filas militares, sino también alargará innecesariamente el tiempo para procesar todos los casos y castigar a los responsables. Queda aún mucho por hacer.